



Ayuntamiento de Bolulla  
Sr. Alcalde-Presidente  
Av. Constitució, 12  
Bolulla - 03518 (Alicante)

=====  
Ref. queja núm. 1702383  
=====

**(Asunto: Falta de respuesta expresa. Ayuntamiento de Bolulla).**

(S/Ref.: Informe de Alcalde-Presidente de fecha 21/02/2017 con registro de salida nº132).

Sr. Alcalde-Presidente:

Acusamos recibo de su escrito por el que nos remite informe en relación a la queja presentada por (...), (...) de la Plataforma Valencianista (PLV).

El autor de la queja en su escrito inicial sustancialmente manifestaba los hechos y consideraciones siguientes:

- Que había dirigido escrito a esa corporación local en relación a su pertenencia a la "Xarxa de Municipis valencians Ramón Llull".
- Que, en el momento de dirigirse a esta institución, no ha obtenido respuesta expresa a su escrito.

Admitida a trámite la queja, solicitamos informe al Ayuntamiento de Bolulla que, a través de su Alcalde-Presidente, nos comunicó en fecha 21/02/2017 lo siguiente:

Considera esta Corporación que la queja sobre el acuerdo (de adhesión a la Xarxa Ramon Llull), guarda escasa relación con la real pretensión del interesado que no es sino pretender un pronunciamiento sobre la diferenciación de la lengua catalana con la valenciana.

Sin ánimo de abundar, y sin que sea el motivo de la pretensión, esta Entidad Local entiende que el acuerdo resulta lícito, es válido y conforme a derecho, sin que del mismo se pueda observar un menoscabo o desprecio a la denominación lingüística "valenciano", ni que con el mismo se otorgue mayor preponderancia ni denomine de modo oficial a la lengua que se habla en la Comunidad Valenciana con una u otra denominación.

No resulta propio ni menester de esta Alcaldía entrar en debates dialectales de amplio espectro, cultural, antropológico y social, cuya, siquiera,

La autenticidad de este documento electrónico puede ser comprobada en <a href="https://seu.elsindic.com">https://seu.elsindic.com</a>		
<b>Código de validación:</b> *****	<b>Fecha de registro:</b> 19/04/2017	<b>Página:</b> 1
C/. Pascual Blasco, 1 03001 ALACANT	Tels. 900 21 09 70 / 965 93 75 00	Fax 965 93 75 54
www.elsindic.com	Correo electrónico: consultas_sindic@gva.es	

argumentación por esta Corporación, haría desmerecer los grandes estudios científicos y las harduas batallas jurídicas (por todas, las STC 75/1997, de 21 de abril, STS 15.03.2006, SsTJCAV 4.03.2004, 20.06.2005, 3.06.2010).

Entendemos que los gestos de adhesión de ciudades valencianas en una red de mayor amplitud territorial con vínculos lingüísticos sino idénticos, si notablemente semejantes, en tiempos como el actual, ha de respaldarse más que servir de segmentación y fragmentación social, lo cual parece que perturba al aquejado.

Salvas que el aquejado tenga un mayor conocimiento doctrinal, científico o antropológico-social sobre la unidad o diferenciación de las lenguas, el nomen iuris de la lengua no ha de suponer un elemento diferenciador sino, por el contrario, y con independencia del que quepa otorgarle, todo ello y sin perjuicio del que jurisprudencialmente haya tenido ocasión de sentenciarse reiteradamente.

Así las cosas, igual que la Asociación aquejada tiene plena libertad para defender la fragmentación lingüística, sin mayor aportación documental, también ha de resultar perfectamente comprensible que otras ciudades, de muy diverso signo político y conformación social, pretender aunar esfuerzos más allá de lo estrictamente normativo, y unir pueblos y sociedades cuya idéntica o símil habla les une, pero les une dentro del Estado o Nación Española, cuna de multitud de lenguas cooficiales junto al español.

Por tanto, legítimamente, y aunque sólo sea para el nivel interno (y organizativo) de la propia organización asociativa que se pretendía crear, debe permitírselle que se utilice una (como podría haber sido otra) denominación del habla que le une, y no que les separa, todo ello y sin perjuicio de que, otros, con mejor saber y juicio, puedan llegar a pensar que se trate lícita, académica o legalmente de una u otra denominación lingüística, lo que tanto molesta al aquejado.

Recibido el informe, le dimos traslado del mismo al promotor de la queja al objeto de que, si lo consideraba oportuno, presentase escrito de alegaciones; no obstante ello, y a pesar del tiempo transcurrido desde entonces, no tenemos constancia de que dicho trámite haya sido verificado.

Llegados a este punto, y tras la detenida lectura del escrito inicial de queja y del informe remitido por la Administración, procedemos a resolver la misma con los datos obrantes en el expediente.

Con carácter previo, consideramos que el ciudadano que acude a la Administración Pública solicitando una actuación administrativa determinada, el éxito de su pretensión requerirá la eliminación de toda barrera burocrática, a tal fin las Leyes administrativas no escatiman en el reconocimiento expreso de numerosos derechos de exigencia del particular frente a la Administración, orientados a facilitarle sus trámites. Ahora bien, la forma o modalidad en que se debe facilitar el ejercicio de estos derechos es una potestad de la Administración actuante. Se debe rechazar toda interpretación desmesurada de este derecho y centrarla en la simple obligación de la Administración de facilitarle su ejercicio.

Sin perjuicio de lo anterior, de lo actuado se desprende que esa Administración no dio respuesta expresa al escrito del promotor de la queja (escrito que le fue adjuntado en

nuestra petición inicial de informe y que constituye el motivo principal de la presente queja).

En este sentido, es necesario tener presente que constituye una competencia esencial del Síndic de Greuges, a tenor de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 11/1988, reguladora de esta Institución, velar porque la Administración resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.

Lo anterior se debe poner en relación el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de resolver, dentro de los plazos previstos en la normativa, las solicitudes que le dirijan los/as ciudadanos/as.

El derecho a obtener una respuesta sobre lo peticionado a la Administración impone a ésta un plazo máximo para resolver, con el fin de evitar esperas interminables del ciudadano, so pena de aplicar reglas del silencio positivo o negativo. Claramente lo formula la exposición de motivos de la citada Ley

(...) el silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser instituido jurídico normal, sino la garantía que impida que los derechos de los particulares se vacíen de contenido cuando su Administración no atienda eficazmente y con celeridad debida las funciones para las que se ha organizado.

La Administración está obligada a responder al ciudadano que acude a ella, no dando más de lo que puede y debe hacer, pero tampoco menos de los que razonablemente puede esperarse, y lo mínimo que ha de ofrecer al ciudadano es una respuesta directa, rápida, exacta y legal. Estamos, pues, ante una de las manifestaciones legislativas del derecho a obtener una resolución expresa dentro de plazo.

En este sentido, el Tribunal Constitucional tiene dicho, desde antiguo, en su Sentencia núm. 71, de fecha 26 de marzo de 2001, que

(...) es evidente, como hemos declarado en reiteradas ocasiones (por todas, SSTC 6/1986, de 21 de enero, FF. 3; 204/1987, de 21 de diciembre, F. 4; 180/1991, de 23 de septiembre, F. 1; y 86/1998, de 21 de abril, FF. 5 y 6), que la Administración no puede verse beneficiada por el incumplimiento de su obligación de resolver expresamente en plazo solicitudes y recursos de los ciudadanos, deber éste que entraña con la cláusula del Estado de Derecho (Art. 1.1 CE), así como con los valores que proclaman los Arts. 24.1, 103.1 y 106.1 CE.

Por cuanto antecede y de conformidad con lo previsto en el Art. 29 de la Ley de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de diciembre, reguladora de esta Institución, **recomiendo** al **Ayuntamiento de Bolulla** que, en casos como el analizado, extreme al máximo el deber de dar respuesta expresa dentro de los plazos establecidos. A este respecto, le **recomiendo** que, a la mayor brevedad posible, dé respuesta expresa al escrito del autor de la queja.

Asimismo, de conformidad con la normativa citada, le agradecemos nos remita en el plazo de un mes, el preceptivo informe en el que nos manifieste la aceptación de la recomendación que se realiza, o en su caso, las razones que estime para no aceptarla.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de la semana siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará en la página Web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión de lo interesado, le saluda atentamente,

José Cholbi Diego  
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana